**LECCIONES DE
DERECHO PENAL
PARTE ESPECIAL**

Jesús-María Silva Sánchez (dir.)
Ramon Ragués i Vallès (coord.)

M.^a Teresa Castiñeira Palou

David Felip i Saborní

Guillermo Benlloch Petit

Ricardo Robles Planas

Nuria Pastor Muñoz

Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno

Raquel Montaner Ferrández

Mariona Llobet Angli

TEMA 4 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

Ramon RAGÜES I VALLÉS

SUMARIO. I. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA LIBERTAD: INTRODUCCIÓN. II. LAS DETENCIONES ILEGALES Y LOS SECUESTROS: 1. Modalidad básica; 2. Subtipos agravados; 3. Subtipos atenuados. III. LAS COACCIONES: 1. Modalidad básica; 2. Subtipo agravado; 3. La falta de coacciones y las coacciones como violencia de género. IV. LAS AMENAZAS: 1. Modalidades delictivas: A. Amenazas de un mal constitutivo de delito. B. Amenazas de un mal no constitutivo de delito; 2. La falta de amenazas y las amenazas como violencia de género. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.

I. LA PROTECCIÓN PENAL DE LA LIBERTAD: INTRODUCCIÓN

El Código Penal dedica sus arts. 163 a 172 a la protección de la libertad. La Constitución proclama en su art. 1 que la libertad es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico y destina su artículo 17 a reconocer que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad». El Tribunal Constitucional define en algunas resoluciones este derecho fundamental como la «autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se le presentan, de acuerdo con sus propios intereses y preferencias» (STC 113/1994, de 14 de abril, ponente Cruz Villalón).

Este reconocimiento general de la libertad se materializa en la protección jurídica de muy diversas libertades concretas que derivan de ella. Algunas de estas libertades han sido reconocidas como derechos funda-

mentales y proclamadas expresamente en el texto de la Constitución, como es el caso, por ejemplo, de la libertad ideológica (art. 16 CE) o de la libertad de expresión (art. 20 CE). Otras, sin gozar de reconocimiento constitucional expreso, se deducen de la propia idea general de libertad o de su relación con otros derechos. Así sucede, por ejemplo, con el derecho a la libertad sexual (cfr. Tema 6) o con la libertad de disposición del propio patrimonio, que se deduce del derecho a la propiedad privada (art. 33 CE).

Algunas de estas plasmaciones concretas de la libertad gozan de **protección penal específica**. Este es el caso, por citar algunos supuestos, de los delitos contra la libertad sexual (art. 178 ss. CP) o contra la libertad de conciencia (art. 522 CP). En virtud del principio de especificidad, estas previsiones más específicas deberán aplicarse con preferencia a las infracciones penales que protegen la libertad en general, que son las analizadas en este Tema.

Seguidamente se exponen, siguiendo el orden establecido por el Código Penal, las **tres figuras delictivas** que se contemplan en el Título VI del Libro II, dedicado a los delitos contra la libertad. En primer lugar, los delitos de detenciones ilegales y secuestros, cuya finalidad es proteger uno de los aspectos más importantes del derecho a la libertad, como es la libertad ambulatoria o de movimientos (art. 19 CE) y, a continuación, los delitos de amenazas y coacciones, que según opinión dominante protegen la libertad en general, actuando como tipos básicos para la protección de este bien jurídico en todos aquellos supuestos que no están específicamente regulados por otros preceptos.

II. LAS DETENCIONES ILEGALES Y LOS SECUESTROS (ARTS. 163-168 CP)

1. Modalidad básica

Como se ha anticipado en el epígrafe anterior, los delitos de detenciones ilegales y secuestros pretenden la protección de la **libertad ambulatoria o de movimientos**, que según opinión común es una de las concreciones más importantes del derecho a la libertad en general: «el don más preciado después de la propia vida», llega a afirmar en alguna resolución el Tribunal Supremo (cfr. Sentencia de 13 de diciembre de 1996, ponente De Vega Ruiz). La importancia de este bien jurídico justifica las graves penas que, como se verá, se prevén para estos delitos.

La protección penal de este derecho se articula a partir de una **figura básica**: el delito de detenciones ilegales previsto en el art. 163.1 CP. Este precepto proclama lo siguiente:

«El particular que encerrar o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años».

De acuerdo con esta disposición, las **conductas típicas** previstas son dos: encerrar y detener a otra persona. Además, como consecuencia de estos comportamientos debe producirse un efecto de privación de libertad del sujeto pasivo. Existen buenos motivos para considerar que esta doble regulación es redundante, puesto que todo encierro conlleva en sí mismo una detención y, por tanto, habría bastado con prever esta segunda conducta o, simplemente, con establecer el castigo de quien prive de libertad a otro.

En este último sentido debe significarse que las privaciones de libertad penalmente relevantes **no requieren medios comisivos más concretos** que el encerrar o detener, siendo típicas tanto las detenciones o encierros provocados por medios violentos o intimidatorios —lo más frecuente en la práctica—, como a través de otros comportamientos como el engaño (por ejemplo, A para que entre en un local y, una vez dentro, cierra con llave impidiéndole salir).

De acuerdo con el tenor literal del art. 163.1 CP, la modalidad básica de detenciones ilegales sólo es aplicable cuando el sujeto activo sea un particular, debiendo apreciarse la modalidad agravada del art. 167 CP en el caso de que el autor sea un funcionario público.

En la práctica, el problema más complejo que plantea el tipo básico de las detenciones ilegales es su **delimitación respecto de la figura de las coacciones** (cfr. *infra* III). Tal dificultad se explica, en gran medida, por la severa pena mínima de cuatro años de prisión prevista en el art. 163.1 CP, un castigo que parece excesivo en aquellos supuestos en los que se juzga una privación de libertad que no ha sido especialmente prolongada. Ello lleva a que en estos casos a menudo los tribunales postulen interpretaciones restrictivas del art. 163.1 CP.

Esta postura se advierte en resoluciones como la STS de 28 de septiembre de 1999 (ponente Delgado García), que se refiere a los siguientes hechos: los acusados abordaron a la víctima y le pidieron que les condujera en coche a una localidad que le aseguraron estaba a unos 5 kms. de distancia. Ya en camino, al ver el conductor un cartel informativo que indicaba una distancia considerablemente superior a la que le habían indicado los acusados, les comunicó que no les podía llevar hasta allí. Entonces, uno de ellos exhibió una navaja de grandes dimensiones y se la mostró a la víctima, al tiempo que le decía que debía portarse bien y llevarlos hasta el destino, todo lo cual fue obedecido por el conductor. En su sentencia, el Tribunal Supremo revocó la previa condena de los acusados como autores de un delito de detenciones ilegales con el argumento de que «lo que hubo fue un obligar a la víctima a que continuara un viaje que había iniciado voluntariamente, aunque engañada en cuanto a la distancia a reco-

rrer», añadiendo que «20 minutos es poco tiempo para conformar una detención ilegal».

Sin embargo, el propio Tribunal Supremo no ha dudado en apreciar detenciones ilegales consumadas en otros supuestos en los que la duración de la privación de libertad ha sido menor, como el caso resuelto en la Sentencia de 21 de julio de 1999 (ponente Martínez-Perea Rodríguez), en que dicha privación no superó los cinco minutos. En este supuesto los acusados «se trasladaron a las obras del pantano de Lóiz (...). Una vez allí y con carácter previo a la acción que desarrollarían, dos o tres de los acusados, sin que hayan podido ser identificados, se dirigieron a una caseta sita cerca de los biñones, donde se encontraba el vigilante jurado Fernando de la S. G., a quien sorprendieron, golpeándolo y desarmándolo y logrando inmovilizarlo, atándole de pies y manos, dejándolo en el interior de la caseta, si bien pudo desatarse por sí mismo al cabo de unos cinco minutos».

Los criterios que la jurisprudencia suele emplear más a menudo para resolver esta cuestión son, por un lado, el tiempo de la detención y, por otro, las intenciones del sujeto activo, valorando también si los medios comisivos empleados han anulado por completo (detenciones ilegales), o sólo reducido (coacciones), la libertad de movimientos de la víctima. Sin embargo, como ponen en evidencia los anteriores ejemplos, existen numerosas resoluciones que se contradicen entre sí, hasta el punto de que en muchas sentencias se afirma que ninguno de los citados criterios resulta decisivo, reconociendo implícitamente que éste es un problema que debe resolverse «caso por caso». Como es obvio, semejante afirmación introduce un grado importante de arbitrariedad en la solución de cada supuesto concreto.

También se producen problemas de delimitación cuando, para la comisión de un robo con intimidación o una agresión sexual, la víctima se ve privada durante un tiempo de su libertad ambulatoria.

En estos casos la jurisprudencia (por ejemplo, la STS de 22 de julio de 2002, ponente Martín Canivell, para la agresión sexual y la STS de 23 de octubre de 1998, ponente Giménez García, para el robo) señala que la privación de libertad quedará absorbida por el robo o la agresión siempre que aquella no supere el tiempo estrictamente necesario para consumar estos delitos. Esta jurisprudencia sostiene la existencia de una detención ilegal cuando la privación de libertad se prolonga más allá de la consumación del segundo delito: así, por ejemplo, en el caso de los sujetos que, para ejecutar un robo, mantuvieron a las víctimas dejándolas en esta situación para asegurar la posterior huida (STS de 23 de octubre de 1998).

En el delito de detenciones ilegales —en todas sus variantes— el Código Penal no sólo castiga la consumación y la tentativa de delito, sino también la provocación, la proposición y la conspiración (art. 168 CP). Asimismo, tanto el delito de detenciones ilegales como todos los subtipos

agravados que se analizan en el siguiente epígrafe son delitos dolosos, no siendo punible la realización imprudente de estas infracciones.

2. Subtipos agravados

El Código Penal prevé diversos supuestos en los que se agrava la pena establecida para la modalidad básica de las detenciones. Así sucede cuando la privación de libertad se prolonga más allá de quince días (art. 163.3 CP), cuando el sujeto activo ejecuta el hecho con simulación de autoridad o de función pública (art. 165 CP) o cuando la víctima es menor de edad, incapaz o funcionario público en el ejercicio de sus funciones (art. 165 CP).

Una cuarta modalidad agravada, y especialmente polémica, de detenciones ilegales se prevé en el art. 166 CP, que castiga al reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida, salvo que la haya dejado en libertad. Este precepto parece destinado a reprimir las conductas denominadas de **desaparición forzada de personas**, que pueden llegar a castigarse con penas que superan los diez años de prisión. La severidad de estas sanciones lleva a una parte de la doctrina a mostrar una crítica con este precepto, al considerar que en él se castiga al sujeto activo sobre la base de una sospecha de asesinato que resulta incompatible con la Constitución y, más concretamente, con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24 CE).

Sin embargo, en su Sentencia de 25 de junio de 1990 (ponente Ruiz Vadillo) sobre el denominado caso de «El Nani» (apodo de un delincuente común que fue detenido por agentes de la Policía Nacional sin que, hasta el día de hoy, se haya vuelto a conocer su paradero) el Tribunal Supremo justificó la gravedad de las sanciones previstas para este delito con las siguientes palabras: «La Ley Penal establece una pena progresiva más alta en función del tiempo que dura la detención ilegal y nadie discute la legitimidad de tal agravación y fija, por último, una pena superior cuando ni siquiera se conoce cuánto va a durar la privación puesto que el hecho probado afirma que no se conoce el paradero del detenido. No hay en el precepto sospechas de muerte ni siquiera de atentado a la integridad, sino constatación de un hecho iniscriptible: que al detenido no se le puso en libertad». La legitimidad de estos razonamientos fue confirmada por el Tribunal Constitucional en su Auto 421/1990, de 28 de noviembre, en el que inadmitió el recurso de amparo interpuesto por los agentes condenados.

Entre las modalidades agravadas de detenciones ilegales cabe citar también la figura del secuestro (art. 164 CP), que es una detención calificada por el hecho de que el sujeto activo exija alguna condición para poner en libertad a la víctima. Tal condición no tiene por qué ser económica, sino que

su naturaleza puede ser cualquier otra (política, por ejemplo) y puede tener como destinatario tanto a la propia víctima como a terceras personas.

Según se afirma en la STS de 27 de diciembre de 2004 (ponente Colmenero Menéndez de Luarca), «la jurisprudencia ha entendido que la exigencia puede hacerse al mismo detenido o a un tercero (...), aunque generalmente se concreta en la exigencia de una actividad externa y ajena al propio sujeto pasivo; y que el cumplimiento de la condición ha de operar como un requisito de la puesta en libertad, pues como se dice muy expresivamente en la STS 376/1999, de 11 de marzo, "detener a una persona para conseguir un objetivo no se identifica exactamente con exigir el logro de ese objetivo a cambio de la liberación de aquella". Este es el elemento característico del delito de secuestro, y debe resultar del hecho probado la relación de dependencia entre la exigencia y la cesación de la detención». De acuerdo con esta jurisprudencia, la propia Sala Segunda ha negado la existencia de un secuestro cuando la privación de libertad se ha producido como represalia por un hecho previo (cfr. STS de 30 de noviembre de 2004, ponente Berdugo Gómez de la Torre).

Otra modalidad agravada importante en la práctica es la prevista en el art. 167 CP que castiga a la **autoridad o funcionario público** que, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito, comete una detención ilegal, previendo la imposición en su mitad superior de las penas previstas para las detenciones o secuestros de que se trate, así como una pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años.

Este precepto plantea **problemas de delimitación** con la modalidad básica de las detenciones ilegales (art. 163.1 CP), pues a menudo no resulta sencillo decidir cuándo un funcionario o autoridad está actuando como tal y cuándo obra como un simple particular.

Este problema se plantea, por ejemplo, en el caso resuelto por la STS de 23 de junio de 2000 (ponente Aparicio Calvo-Rubio): los acusados, un policía nacional y un guardia civil, actuando fuera de servicio y vestidos de paisano, se dirigieron, en compañía de otro acusado, al domicilio de Andrés M. C. a quien recriminaron el haber abusado sexualmente —cuando impartía una clase práctica de automóvil— de la joven Encarnación M. S. (hija de un acusado y novia de otro). Acto seguido le obligaron por la fuerza a introducirse en un vehículo y le trasladaron a las dependencias de la comisaría, donde aprovechándose de las facilidades que les confería su condición de agentes de la autoridad, lo presentaron a un funcionario de policía. En este supuesto el Tribunal Supremo consideró correctamente inaplicable el art. 167 CP al entender que los funcionarios acusados «no habían actuado, en absoluto, como tales, ni en el ejercicio de su competencia funcional pues no la tenían en el caso debatido para detener, por faltar la denuncia previa como requisito de procedibilidad, ni actuaban como tales agentes sino como simples particulares hasta tal punto que si los malos tratos que infligieron al detenido hubieran sido replicados por éste nunca habrían podido invocar

legítimamente su condición profesional porque en aquellos momentos, por su abusivo e incorrecto proceder, no lo eran en modo alguno, sino meros particulares». Ante semejantes razonamientos cabe, no obstante, preguntarse en sentido crítico si, en caso de haber sido otra la profesión de los sujetos activos, estos habrían contado con tantas facilidades para acceder a una dependencia policial.

Igualmente, esta modalidad agravada de detenciones ilegales plantea complejos problemas de delimitación con el art. 530 CP, que castiga, entre los denominados **delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual**, a «la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales». En este caso, la decisión depende de cómo se interprete la expresión «mediando causa por delito» (art. 530 CP) o «sin mediar causa por delito» (art. 167 CP).

En la STS de 22 de noviembre de 2004 (ponente Sánchez Melgar) se señala que «el tipo del artículo 530 queda reservado a los casos de detención justificada pero en la que se produce luego el incumplimiento de los plazos legales, como expresamente prevé el tipo penal, o la inobservancia de las restantes exigencias, como la de no poder exceder la detención del tiempo estrictamente necesario (arts. 17.2 CE y 520 LECrim), o de las garantías del artículo 520, a salvo lo relativo a la información de derechos cuyo incumplimiento ya hemos dicho origina el delito del artículo 537 y no el del 530 del Código Penal». En la anterior STS de 15 de noviembre de 2001 (ponente Moyña Ménguez) se argumenta que el art. 530 debe aplicarse cuando «la detención tiene "ab initio" una justificación legal que deviene ilegítima cuando se conculcan las garantías establecidas en favor del detenido», mientras que el 167 CP es aplicable «cuando la detención nace o surge —con simple pretexto de legalidad— por razones ajenas al servicio e interés público, por motivaciones exclusivamente privadas». Esta última interpretación plantea problemas de delimitación con el tipo básico del art. 163.1 CP, pues, como antes se ha expuesto, cierta jurisprudencia entiende inaplicable el tipo agravado de funcionario cuando el sujeto actúa por motivos estrictamente privados.

3. Subtipos atenuados

La pena del delito de detenciones ilegales se atenúa en dos supuestos. En primer lugar, cuando el sujeto activo devuelve la libertad a la persona detenida **dentro de los tres primeros días de la detención**, siempre que no haya alcanzado el objetivo que se había propuesto (art. 163.2 CP). La aplicación de esta atenuación exige que sea el sujeto activo quien dé libertad a la víctima, no siendo por tanto aplicable en aquellos supuestos en

los que es el sujeto pasivo quien consigue recuperar la libertad por sus propios medios.

Sobre el alcance de este subtipo razona el Tribunal Supremo (cfr. Sentencia de 4 de abril de 1994, ponente García Ancos) que «cuando en los supuestos de una detención ilegal la liberación del detenido sólo y únicamente tiene por causa directa, bien la astucia, bien la habilidad del recluso, no cabe minimizar la pena del que privó de la facultad deambulatoria a aquél. Se trata, por tanto, de una acción voluntaria y personalísima (la de la puesta en libertad), que no cabe tasarla a terceras personas, so pena de que se produzca el absurdo de entender beneficiaria de una acción a quien no la ha realizado, ni siquiera ha colaborado a su realización».

Una segunda modalidad atenuada —prevista en el art. 163.4 CP— se reserva para aquellas situaciones en las que un particular, fuera de los casos permitidos por la ley, **aprehende a otra persona para presentarla inmediatamente a la autoridad**. Los supuestos en que un particular puede legítimamente detener a otro se hallan previstos en el art. 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este precepto establece que cualquier persona puede detener: a) Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo; b) Al delincuente in fraganti; c) Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguido condena; d) Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme; e) Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior; f) Al que se figure estando detenido o preso por causa pendiente; y g) Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. Las previsiones de este artículo determinan que, como regla general, un particular no puede detener a otro cuando éste ya ha finalizado la ejecución del delito, a no ser que se trate de un detenido o preso huido.

Cuando fuera de estos casos un particular detiene a otro, aunque sea con la finalidad de entregarlo de forma inmediata a la autoridad, cometida en un delito. La existencia de semejante finalidad, no obstante, es tenida en cuenta por el Código en beneficio del sujeto activo, a quien sólo se podrá imponer una pena de multa. Este leve castigo se explica seguramente porque con este precepto no se pretende tanto castigar una privación de libertad más o menos antijurídica como evitar que los particulares traten de «tomarse la justicia por su mano» sin recurrir a los medios legalmente previstos para la práctica de detenciones. Ello permite sostener que, tal vez, esta figura podría haber encontrado mejor acomodo entre los delitos contra la Administración de Justicia (arts. 446-471 CP; cfr. Tema 17).

III. LAS COACCIONES (ARTS. 172 Y 620.2.º CP)

1. Modalidad básica

El delito de coacciones se halla regulado en su modalidad básica en el primer párrafo del art. 172.1 del Código Penal, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados».

El delito se comete con la realización de cualquiera de estas dos conductas: impedir a otro hacer lo que la ley no prohíbe u obligarle a hacer lo que no quiere, sea justo o injusto. Además, para poder apreciar unas coacciones el Código Penal exige un medio comisivo específico de los anteriores comportamientos: el uso de violencia.

Como se ha anticipado (cfr. *supra* I), el bien jurídico protegido por esta infracción es la libertad y, de forma más concreta, la **libertad de obrar**, esto es, el derecho de cualquier persona a ejecutar externamente las decisiones previamente tomadas. Este derecho se ve conculcado cuando una persona impide a otra poner en práctica sus decisiones o le obliga (compele) a realizar una conducta que no desea llevar a cabo.

La conducta de impedir sólo es típica cuando su objeto sea evitar que el sujeto pasivo realice conductas lícitas («que la Ley no prohíbe»), no siendo subsuntible en el tipo la conducta de quien impide a otro realizar un comportamiento prohibido. En cambio, en el caso de compelir la conducta es relevante penalmente incluso en los supuestos en que el comportamiento a que se obliga a la víctima resulta conforme a ley (es «justo», según el Código). Con todo, esta distinción se ve difuminada en la práctica por el hecho de que casi siempre que se aprecia una conducta de «impedir» concurre simultáneamente otra consistente en «compeler» (por ejemplo, quien expulsa a empujones a un alborotador en un espectáculo público le está impidiendo hacer algo que la ley prohíbe [continuar alborotando], pero al mismo tiempo le está compeliendo a efectuar algo que no quiere [abandonar el local]). Para superar estos problemas, algunos autores (Jakobs) proponen interpretar las coacciones entendiendo que sólo las privaciones de «libertad jurídicamente reconocida» puedan tener cabida en el delito. Un planteamiento que *legis lata* parece tener difícil traslación al Derecho español, pues el art. 172 CP declara expresamente que existen coacciones aun en el caso en que la víctima sea compelida contra su voluntad a efectuar un comportamiento «justo».

En lo que al medio comisivo respecta —la violencia— cabe definirlo, de entrada, como el uso de fuerza física sobre el cuerpo de otra persona. Sin embargo, con el paso de los años este requisito se ha ido interpretando por la jurisprudencia de forma cada vez más «espiritualizada», incluyendo en el término «violencia» no sólo el uso de fuerza física contra otra persona, sino también la intimidación con la causación de un mal inmediato, el uso de fuerza en las cosas y el recurso a cualquier vía de hecho —aun omisiva— para impedir a otra persona el ejercicio de sus derechos.

Este fenómeno ya se describía en la STS de 24 de marzo de 1983 (ponente Vivas Marzal), en la que se afirmaba que «dicha violencia que, en principio, tanto la doctrina como la jurisprudencia, estimaron había de ser física, es decir, "vis absoluta" o "vis atrox" —"vis corpore corpori afflicta"—, con el tiempo se fue extendiendo paulatinamente a la "vis psíquica" o "vis compulsiva", en la que la presión o influjo sobre la voluntad ajena se logra con intimidación o por vía de medios coactivos o coercitivos de índole moral, pudiendo recaer sobre sujetos distintos del pasivo con tal de que, el temor racional y fundado inspirado a aquéllos, refluya sobre el referido sujeto pasivo y disminuya o anule su libertad de determinación. Llegando, más tarde, a incluirse, en el precepto estudiado, conductas constitutivas de "vis in rebus", en las que, mediante fuerza en las cosas, se logra la compulsión necesaria para torcer o doblegar la voluntad ajena, obligándola a ceder y a capitular». En este supuesto, la Sala Segunda confirmó la condena de un alcalde que decidió cortar el suministro de agua a dos vecinos de su municipio que no habían satisfecho una contribución especial.

En tiempos recientes, se observa a menudo la tendencia de los tribunales a prescindir totalmente del requisito de la violencia, considerando coacción punible cualquier privación ilegítima de derechos ajenos no encuadrable en ningún otro tipo delictivo.

Así, en su Sentencia de 11 de julio de 2001 (ponente Martín Cantwell), el Tribunal Supremo confirma la condena por coacciones del sujeto que se negó a devolver una máquina cuya posesión orientaba al haber surgido ciertas discrepancias con su propietario en el curso de las relaciones comerciales que les unían. Para justificar semejante decisión argumenta la Sala Segunda que en dicho caso «la violencia sobre la persona se actuó mediante fuerza en las cosas, la menos fuerte de las que puedan actuar, pero, ello no obstante, fueron de notable intensidad los medios empleados, así como el resultado obtenido que determinó un impedimento ilegítimo y de bastante duración».

En una línea similar, la SAP-Barcelona de 27 de diciembre de 1999 (ponente Castello Guillabert) confirma la condena por coacciones de un funcionario que, al causar baja, se negó a comunicar a sus superiores cuál era la clave que permitía acceder a su ordenador. Muy a menudo, se ha recurrido también al tipo de las coacciones para castigar los supuestos de «cebro de morosos», en los que un sujeto, disfrazado de forma llamativa, se pre-

senta en el lugar de trabajo de un deudor con la intención de hacer pública su condición de moroso entre las personas de su entorno (cf., por ejemplo, la SAP-Málaga de 12 de febrero de 2001, ponente Codino Izquierdo).

Finalmente, en tiempos recientes algunas resoluciones han proclamado que las coacciones son el tipo idóneo para tratar el fenómeno del denominado *mobbing* inmobiliario, es decir, aquellas situaciones en las que el propietario de un inmueble, activamente o por omisión de sus deberes más básicos de conservación de la finca, trata de expulsar de sus viviendas a aquellos arrendatarios que satisfacen, por el alquiler indefinido de sus pisos, rentas muy exiguas (cf., por ejemplo, el AAP-Barcelona de 27 de abril de 2004, ponente Navarro Morales).

Este proceso de espiritualización —o incluso desaparición— del requisito de la violencia suscita serias dudas desde el punto de vista de la prohibición de analogía en perjuicio de reo prevista en el art. 4 CP. Sin embargo, tal planteamiento parece contar con el beneplácito del Tribunal Constitucional o, por lo menos, esto es lo que se desprende de su Sentencia 137/1997, de 21 de julio (ponente Viver Pi-Sunyer).

En esta resolución se denegó el amparo solicitado por el jefe de un piquete de huelguistas condenado como autor de coacciones por haber dicho a uno de los directivos de la empresa que no podía entrar a la sede social «dado el panorama que había, sin que hiciera ninguna indicación u orden a los huelguistas, los cuales impedían la entrada y salida de vehículos (...) recibiendo alburcheos de los trabajadores». Entiende el Tribunal Constitucional que apretar coacciones en semejante supuesto no supone incurrir en analogía contraria al reo, al no poder afirmarse «que la substanción judicial impugnada sea irrazonable o fuere el tenor literal del tipo penal aplicado».

Desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva, las coacciones en todas sus modalidades —tipo básico, subtipo agravado y falta— requieren dolo para que pueda afirmarse su relevancia penal.

Por último, la doctrina interpreta que en el elemento típico «sin estar legitimamente autorizado», que se refiere al sujeto activo del delito de coacciones, el Código contiene una remisión —seguramente superflua— a las causas de justificación y, en especial, al cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho (art. 20.7.º CP) como circunstancia cuya concurrencia impide la apreciación del delito.

2. Subtipo agravado

El segundo párrafo del art. 172.1 del Código Penal prevé una agravación del castigo de las coacciones «cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental». Esta agravación se ha aplicado muy pocas veces en la práctica, entre otras razones por-

que la acción consistente en impedir el ejercicio de derechos fundamentales concretos casi siempre encuentra ya su tipificación expresa en otros capítulos del Código Penal.

3. La falta de coacciones y las coacciones como violencia de género

El art. 620.2.º CP castiga a quien cause a otro una coacción «de carácter leve» con una pena de multa de diez a veinte días. La vaguedad de este precepto —y de la distinción misma entre lo «leve» y lo «grave»— tiene como consecuencia en la práctica el que no existan criterios claros sobre cuáles son los límites entre el delito y la falta de coacciones. Los tribunales no pueden evitar caer en un cierto casuismo en el tratamiento de este tema.

Así, por ejemplo, en la STS de 2 de febrero de 2000 (ponente Moner Muñoz) se establece que la diferencia entre delito y falta debe determinarse valorando «la mayor o menor trascendencia del acto de coacción, la intensidad de la presión ejercida y el grado de malicia y culpabilidad del agente». De forma algo más precisa, por poner otro ejemplo, en la SAP-Murcia de 17 de abril de 1997 (ponente Moreno Millán) se citan, como datos a ponderar, tanto la intensidad del medio empleado, es decir, la gravedad o levedad de la fís física o moral utilizada, como las características del resultado, aun reconociendo «que la apelación a estos criterios siempre supone una apreciación circunstancial relativista y de acentuado casuismo».

De acuerdo con lo que dispone el art. 172.2 CP, en aquellos casos en los que la falta de coacciones se cometa contra quien sea o haya sido esposo/a del sujeto activo o mujer que esté o haya estado ligada a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, la conducta se castigará, pese a su levedad, como delito, con pena de seis meses a un año de prisión y otras accesorias. Esta pena se impondrá en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las previstas en el art. 48 CP o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

IV. LAS AMENAZAS (ARTS. 169-171 Y 620 CP)

Según una extendida definición, amenazar a otra persona es anunciarle el padecimiento de un mal. Si este anuncio se supedita a la realización de una determinada acción u omisión se habla de **amenazas condiciona-**

les: por ejemplo, el sujeto activo le dice a la víctima que si no le entrega cien mil euros (condición), matará a toda su familia (mal anunciado). En los casos en que el anuncio del mal no se supedita al cumplimiento de condición alguna se habla de **amenazas no condicionales**: por ejemplo, el sujeto activo le dice a la víctima, simplemente, que piensa matarla porque le odia.

En relación con la afectación al bien jurídico propia de este delito, la doctrina suele entender que las amenazas condicionales afectan a la libertad del sujeto en su fase interna, es decir, la libertad de escoger sin trabas ni presiones exteriores qué conducta se desea realizar. Por el contrario, en el caso de las amenazas no condicionales una parte de la doctrina (MUNOZ COMDE, por ejemplo) considera que el bien jurídico afectado no es tanto la libertad como la seguridad o tranquilidad de la víctima (en sentido contrario, en cambio, DIEZ RIPOLLÉS, entre otros).

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo sostiene en su Sentencia de 1 de junio de 2001 (ponente Martínez Arrieta) que el interés tutelado por esta modalidad de amenazas «es la libertad del sujeto pasivo que ve alterado su derecho a la tranquilidad y a no estar sometido a temores en el desarrollo normal y ordinario de su vida».

La **conducta típica**, consistente en el anuncio de un mal por parte del autor a la víctima, puede llevarse a cabo de diversas maneras, no siendo necesaria una verbalización explícita de dicho anuncio, siempre que éste pueda deducirse tácitamente de la conducta del sujeto (por ejemplo, una amenaza de muerte no requiere que el autor le diga a la víctima «te mataré», sino que también puede dirigirse por medio de gestos).

La necesidad de contextualizar es puesta de manifiesto por la Sala Segunda en su Sentencia de 1 de junio de 2001 (ponente Martínez Arrieta), en la que se afirma que «el delito de amenazas es un delito de carácter circunstancial que hace que la valoración jurídica de la acción desarrollada deba analizarse desde las expresiones proféticas, las acciones ejercidas, el contexto en el que se vierten, las condiciones del sujeto pasivo y activo y cuantas circunstancias contribuyan a la valoración contextual del hecho».

Al incluir la jurisprudencia dominante los supuestos de intimidación con un **mal de causación inmediata** en el concepto «violencias» del delito de coacciones (art. 172.1 CP; cfr. *supra* III), jueces y tribunales interpretan que en las amenazas el mal cuya causación se anuncia a la víctima debe tener carácter futuro.

En su Sentencia de 18 de marzo de 2000 (ponente Martín Gamiell), sostiene el Tribunal Supremo que la diferencia entre amenazas y coacciones no sólo radica en el efecto producido sobre la libertad del sujeto pasivo, «que será amenazas cuando incida sobre el proceso de formación de sus decisio-

nes voluntarias y coacciones cuando afecta a la voluntad de obrar», sino que también «se introduce un criterio de temporalidad en cuanto las amenazas inciden sobre un proceso mediato de decisión de la víctima y las coacciones afectan con inmediatez temporal a la adopción de una conducta».

Asimismo, la jurisprudencia suele exigir, para apreciar este delito, que el mal con el que se comina a la víctima sea «serio, real y perseverante, además de futuro, injusto, determinado y posible, dependiente de la voluntad del sujeto activo» (STS de 1 de junio de 2001, ponente Martínez Arrieta). Esta última exigencia deja fuera del tipo de las amenazas el anuncio de aquellos males cuya causación no depende de dicho sujeto (por ejemplo, quien simplemente augura o desea a otra persona una desgracia). De este modo se convierte en un elemento del tipo la **capacidad del autor de provocar (o no impedir siendo garante) el mal que anuncia a la víctima.**

Según el mismo Tribunal Supremo la apreciación de las amenazas no depende de que con la comisión del mal el sujeto consiga efectivamente amenazar a la víctima, sino que basta con que las expresiones utilizadas sean objetivamente aptas para ello (Sentencia de 24 de enero de 2000, ponente Marañón Chávarri). Según esta jurisprudencia, deben apreciarse unas amenazas incluso en el caso de aquellas víctimas que no sienten temor ante el anuncio del mal. Con todo, esta interpretación plantea un problema, como es apreciar la consumación del delito en supuestos en los que no parece haberse llegado a afectar el bien jurídico, dado que ni la libertad ni la seguridad de la víctima se habrán visto alteradas.

De acuerdo con la teoría de la imputación objetiva, parece ajustado considerar atípicos aquellos casos en que la víctima —a causa de su especial cobardía— se siente intimidada pese a que las palabras del autor habrían carecido de capacidad intimidatoria para cualquier persona normal. Con todo, tal criterio debe matizarse atendiendo a las circunstancias personales de dicha víctima (por ejemplo, un niño o un anciano pueden sentirse intimidados por males que no asustarían a un joven) y a los conocimientos especiales que respecto de ellas pueda tener el autor.

Tampoco se consideraran constitutivas de delito las amenazas con la causación de un **mal justo** (así, el ATS de 25 de julio de 2001, ponente Marañón Chávarri): tal es el caso, por ejemplo, de quien anuncia a otro que emprenderá acciones legales si no le compensa los perjuicios económicos que le ha ocasionado o del profesor que advierte a sus alumnos que tendrá que suspenderles si no estudian.

De acuerdo con la jurisprudencia (cf. STS de 14 de septiembre de 2000, ponente Sánchez Melgar) el presente delito se consuma «con la llegada del anuncio a su destinatario». Asimismo, todas las modalidades de amenazas relevantes penalmente requieren la existencia de dolo.

1. Modalidades delictivas

A. Amenazas de un mal constitutivo de delito

El Código Penal castiga en sus arts. 169 y 170, como modalidad de amenazas más gravemente sancionada, la conducta consistente en amenazar a otro «con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico».

La pena prevista para esta modalidad típica es de prisión de uno a cinco años «si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito». En el caso de que el culpable no alcance dicho propósito, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.

Cuando las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos, las anteriores penas se impondrán en su mitad superior. En el caso en que las amenazas no sean condicionales, la pena a imponer es menos grave que la anterior, consistiendo en prisión de seis meses a dos años.

La Sala Segunda justifica la agravación de las amenazas hechas por escrito en que en ellas se aprecia «una mayor reflexión en la comisión del mal que se anuncia» (STS de 14 de septiembre de 2000, ponente Sánchez Melgar). Sin embargo, además de esta explicación subjetiva no cabe ignorar que las amenazas hechas por escrito objetivamente suelen aparentar una mayor seriedad.

El art. 170 CP prevé un **subtipo agravado** para los casos en que «las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atomizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo» y para aquellos supuestos en los que la conducta consista en reclamar públicamente «la comisión de acciones violentas por parte de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas».

La vigente regulación legal —que distingue entre amenazas de un mal constitutivo de los delitos mencionados (art. 169 CP) y de un mal no constitutivo de delito alguno (art. 171 CP)— parece haber olvidado la posibilidad de que se amenace a la víctima con la **causación de un mal que, siendo delictivo, no esté abarcado por la relación de infracciones contenida en el art. 169 CP**.

Ejemplo: un sujeto le dice a otro que, si no le paga una determinada cantidad, cometerá para perjudicarlo un delito de falso testimonio (art. 458 ss. CP); unos individuos anuncian que, si no se accede a sus peticiones económicas, realizarán veridos altamente contaminantes en un río (delito contra el medio ambiente del art. 325 CP).

Aunque algunas de estas conductas pueden quedar abarcadas por tipos penales como el cohecho (por ejemplo, un juez pide dinero a un ciudadano para no prevaricar en perjuicio de sus intereses) y, en todo caso, por la falta de amenazas (art. 620 CP), existen buenas razones para sostener la existencia de una *laguna legal*, pues no se comprende que comportamientos como los expuestos estén tratados con mayor benevolencia que las amenazas de un mal no constitutivo de delito alguno.

B. Amenazas de un mal no constitutivo de delito

El art. 171 CP castiga la conducta consistente en la **amenaza de un mal que no constituya delito** con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses, siempre que la amenaza sea condicional y la condición no consista en una conducta debida. Cuando el culpable haya conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior (art. 171.1 CP).

Junto a este primer comportamiento el Código castiga también el denominado «chantaje» (171.2 CP), consistente en exigir a otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés.

Así, por ejemplo, el caso resuelto en la STS de 26 de enero de 2001 (ponente García Añcos), en el que una prostituta exigió diversas cantidades a uno de sus «clientes» a cambio de no revelar a su familia que habían mantenido relaciones sexuales.

Cuando el hecho públicamente ignorado consista en la **comisión de un delito por parte de la víctima del chantaje** (por ejemplo, A solicita dinero a B a cambio de no revelar que años atrás abusó de una menor), el art. 171.3 CP establece una cláusula para fomentar la denuncia del chantajista según la cual «el ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el juez o Tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados».

2. La falta de amenazas y las amenazas como violencia de género

El art. 620.1.º CP castiga con pena de multa de diez a veinte días a los que **«de modo leve amenacen a otro con armas u otros instrumentos peligrosos, o los saquen en riña, como no sea en justa defensa, salvo que el hecho sea constitutivo de delito»**. Por su parte, el art. 620.2.º CP castiga como falta la conducta consistente en **dirigir a otro una amenaza de carácter leve**. Como sucede en el caso de las coacciones, el Iaconismo del citado precepto provoca ciertas dificultades de delimitación entre el delito y la falta, unas dudas que tienen como consecuencia el que los tribunales resuelvan los casos accidiendo a valoraciones *ad hoc* sobre la gravedad de la conducta enjuiciada.

En la STS de 10 de febrero de 1999 (ponente Delgado García) se toman en consideración como criterios delimitadores la intención de causar el mal, la persistencia en la idea amenazadora y la gravedad del miedo que pudieran sufrir las víctimas. Según esta resolución, la falta de amenazas puede apreciarse incluso en supuestos en los que se hayan usado armas cuando los criterios citados permitan sostener la levedad de la amenaza. En el ATS de 13 de febrero de 2002 (ponente Sánchez Melgar) se afirma que «la diferencia entre el delito y la falta se ha de discernir atendiendo a la mayor o menor gravedad del mal pronosticado y a la mayor o menor seriedad y credibilidad del anuncio del mismo, habiendo de valorarse la amenaza en función de la ocasión en que se profiere, personas intervinientes y actos anteriores, simultáneos y posteriores relacionados con las expresiones amenazantes».

Desde la entrada en vigor de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de **Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género**, el art. 171.4, 5 y 6 CP castiga como delito la comisión de una amenaza leve cuando ésta tenga como víctima a quien sea o haya sido la esposa o mujer del autor, la persona con la que éste mantenga relación afectiva análoga a una convivencia o una persona especialmente vulnerable que conviva con él. Del mismo modo, será también siempre delictiva la amenaza con armas o instrumentos peligrosos a los familiares contemplados en el art. 173.2 del Código Penal (cfr. Tema 5). Las penas previstas para estos delitos se impondrán en su mitad superior cuando se perpetren en presencia de menores, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las previstas en el art. 48 CP o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA. CERVILLO DONDERIS, *El delito de coacciones en el Código Penal de 1995*, Valencia, 1999; GÓMEZ POMAR / ORTIZ DE URBINA GIMENO, *Chantaje e intimidación: un análisis jurídico-económico*, Madrid, 2005;

JAREÑO LEAL, *Las amenazas y el chantaje en el Código Penal de 1995*, Valencia, 1997; LANDROVE DÍAZ, *Detenciones ilegales y secuestros*, Valencia, 1999; JAKOBS, «Coacciones por medio de violencia», trad. Suárez González, en *Id.*, *Estudios de Derecho Penal*, Madrid, 1997, p. 439 ss.; MUÑOZ SANCHEZ, *El delito de detención*, Madrid, 1992.